

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN AMÉRICA LATINA: SE REQUIEREN RESPUESTAS FUERA DEL LIBRETO

Nora Lustig y Jorge Mariscal

24 de abril de 2020

Introducción

La pandemia de la COVID-19 ha puesto al mundo en una cuarentena económica de duración todavía incierta¹. En una presentación reciente, Raghuram Rajan, execonomista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exgobernador del Banco Central de la India, ha dicho que para estar a salvo del virus en cualquier lugar del mundo, este debe ser derrotado en todos los lugares. Esto sugiere que el tránsito de regreso a la normalidad, aun en escenarios optimistas para vacunas y tratamientos, podría medirse en años, y no en meses.

Las economías de Latinoamérica han sido (y continuarán siendo) afectadas por esta crisis en todos los frentes: bajos precios de las materias primas, menor demanda por exportaciones, disminución drástica del turismo y las remesas, interrupciones en la cadena de suministro de insumos, desplome de la demanda interna, y aversión al riesgo del capital global. Para

evitar un escenario que pudiera llegar a un cataclismo mayor, los gobiernos, los organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad en general deberán tomar acciones sin precedentes. Un buen número de estas medidas no formarían parte de repertorio tradicional usado en crisis macroeconómicas típicas. Enfrentar la pandemia en sus múltiples dimensiones, requiere —en cierto sentido— poner al capitalismo “en pausa” temporal, y reasignar prioridades a necesidades que el mercado no podrá satisfacer. Esta crisis también revelará fragilidades sistémicas que requerirán reformas más profundas en el futuro. En este análisis nos concentramos en las acciones de corto plazo que pueden implementarse en el frente internacional, macroeconómico y a nivel local, por los gobiernos y por la sociedad civil en forma de filantropía y redes de apoyo popular.

Perspectivas: fuertes recesiones en todas partes e incremento de la desigualdad y la pobreza

El FMI en su reciente *World Economic Outlook* (abril de 2020), pronostica que la economía mundial podría

¹ Discutimos la naturaleza de esta crisis en: Lustig y Mariscal (2020a).

caer un 3% en 2020. El PIB de Latinoamérica como región experimentaría una caída de 5,2%, mayor a la observada durante la crisis financiera global de 2008-2009. El FMI pronostica que los países más perjudicados serán Venezuela, con -15%; México, -6,6%; Ecuador, -6,3%; Argentina, -5,7%; y Brasil, -5,3%. Entre los países con mejor desempeño esperado están Colombia, con -2,4%; Bolivia, -2,9%; y Uruguay, -3,0. Para América Central como un todo, el FMI anticipa un -3%. En una señal de optimismo, el FMI pronostica para Latinoamérica y el Caribe una recuperación de 3,5% en 2021.

A pesar de apuntar a caídas estrepitosas, estos pronósticos podrían estar subestimando el daño económico a la región. En el mismo reporte, el FMI anticipa caídas del PIB de -5,9% para Estados Unidos, de -7,5% para la eurozona, y de -5,2% para Japón. Para China el pronóstico de crecimiento es de 1,2% (una virtual recesión para los estándares de ese país). Con estas cifras, los pronósticos del FMI en América Latina, comparados con los de los países avanzados, parecen demasiado optimistas y probablemente se verán sujetos a revisiones a la baja por varias razones. Primero, antes de la llegada de la pandemia, Latinoamérica estaba en virtual recesión, habiendo registrado un crecimiento de apenas 0,1% en 2019. Segundo, el desplome en la actividad económica en Asia, Estados Unidos y Europa representan un fuerte shock

externo a la región, aun dejando a un lado las medidas internas de contención que los países latinoamericanos se han visto obligados a tomar en el mes de marzo. Así, al fuerte shock externo hay que sumarle el interno. Tercero, los márgenes de maniobra fiscal y monetarios para aminorar el embate de la crisis son mucho menores en Latinoamérica que en los países avanzados. Esto ya se ve reflejado en la relativa timidez de la mayoría de los programas de rescate anunciados por los gobiernos de la región.

Pero aun si las cifras de crecimiento no se revisaran a la baja, América Latina enfrenta niveles de contracción nunca vistos en la región como un todo, que podrían generar un retroceso social y económico que deshaga lo ganado en décadas. Dadas estas circunstancias inéditas, los líderes de América Latina deben tomar el riesgo de errar por el lado de la cautela, y prepararse para una crisis económica y financiera global más profunda y larga que la que los actuales pronósticos asumen. Cautela, en este contexto, implica tomar medidas mucho más ambiciosas que eviten un peor escenario.

No hay ninguna duda que la crisis sanitaria, las medidas para contener la propagación del coronavirus y la crisis económica inducida por estas —además de por los choques adversos mencionados—, generarán un aumento de la desigualdad y la pobreza. Aventurarse a dar órdenes de

magnitud no es el propósito de este análisis. Baste tomar nota de que los regímenes de cuarentena y las medidas de aislamiento social a lo largo y ancho del mundo están gestando un nuevo tipo de aguda desigualdad: entre quienes pueden mantener una fuente estable de ingresos y aquellos que no. Este grupo está conformado por personas pobres, que en todas las crisis se ven afectadas, pero también por personas de clase media que —si no cuentan con ahorros o redes familiares— pueden volverse “nuevos pobres”.

Los países han puesto en marcha una serie de iniciativas para proteger el empleo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas². Entre las más importantes, se incluyen: moratorias temporales o alivios permanentes de impuestos; postergación o condonación del pago de cargas sociales; reducción de la jornada laboral para evitar despidos y mantener a la fuerza laboral y al capital humano; líneas de crédito y expansión de la liquidez del sistema financiero; y flexibilidad regulatoria para la reestructuración de deudas.

Mientras que a nivel general es importante tratar de proteger lo más posible el empleo, resulta esencial

proteger a los que ya lo han perdido y se han quedado sin ingresos. En este sentido, las medidas de política social más frecuentes incluyen: expansión del seguro de desempleo; pagos compensatorios únicos y extraordinarios; expansión o creación de nuevos programas de transferencias (monetarias o en especie) a grupos pobres y vulnerables; alimentación escolar en casa; prohibición al cese de servicios públicos esenciales (agua, luz, gas); suspensión de multas a los hogares que estén atrasados en los pagos; prohibición de desalojos y eliminación de penalidades por atrasos en arriendos y alquileres; y flexibilización en los pagos de préstamos hipotecarios o personales. Con menos frecuencia, se observan también medidas como subsidios para gastos médicos y control de precios de los productos básicos o de primera necesidad.

Como argumentan Lustig y Tommasi en un trabajo reciente:

Si bien la pandemia ha generado un nuevo grupo de personas empobrecidas y una nueva forma de aguda desigualdad entre quienes continúan recibiendo su ingreso laboral y los que no (porque no pueden trabajar debido a las restricciones sanitarias o perdieron su empleo), esta desigualdad es particularmente cruel con quienes ya eran pobres desde antes (Lustig y Tommasi, 2020).

Encima de ser pobre en términos monetarios, este grupo experimenta múltiples carencias. En particular, vive en condiciones de mayor haci-

² Véase, por ejemplo, la recopilación del Commitment to Equity Institute (www.ceqinstitute.org) de la Universidad de Tulane, disponible en: https://www.dropbox.com/s/pwcbzrvbbljpir/_COVID-19%20en%20LATAM_CEQ.xlsx?dl=0.

namiento y tiene menores niveles de salud, menor acceso a servicios básicos, menor educación y capacidades, menor conectividad y bancarización, y menor capital social.

Este grupo comprende, sobre todo, a los habitantes de los cinturones de pobreza en zonas urbanas, villas miserias y favelas, así como a las comunidades indígenas, a los migrantes indocumentados y a ciertos colectivos particulares (como LGBT). Centrar la atención en los grupos pobres, vulnerables y excluidos tiene sentido tanto por principios éticos, como por razones de eficiencia en el combate de la pandemia y el potencial de recuperación y crecimiento en términos más amplios. Al interior de cada país, aplica lo mismo que lo indicado para las regiones del mundo: para estar a salvo del virus este debe ser derrotado en todos los rincones, incluyendo las comunidades más marginadas y excluidas. Su gran mayoría trabaja en el sector informal, en zonas urbanas, o son jornaleros agrícolas, campesinos sin tierra o minifundistas en el sector rural; es decir, en su enorme mayoría no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social. Una característica común de este grupo es que su capacidad propia para enfrentar los costos de la pandemia y para recuperarse —es decir, su resiliencia— es más limitada que la del resto de sectores de la población.

Prioridades del rescate económico y medidas de protección social

Aunque al confrontar la epidemia ha habido negligencia en algunos países, esta crisis en su origen “no tiene culpables” (Lustig y Mariscal, 2020b). No es el resultado de políticas económicas irresponsables, o de una falla en el sistema de mercado. En lo económico se trata de una crisis inducida por los gobiernos que, correctamente, han dado prioridad a frenar la ola de contagio, asegurar la capacidad de respuesta de los sistemas hospitalarios, y minimizar el número de decesos. Esto implica que las prioridades (no necesariamente en esta secuencia) del uso de recursos del Estado debieran ser:

- El equipamiento de los servicios médicos, maximizar la disponibilidad de pruebas diagnósticas, poner en acción medidas de localización, y el aislamiento temporal de la población infectada o de alto riesgo.
- Compensar en lo posible las pérdidas de ingresos de la población formal e informal que haya perdido su empleo (ya sea por las medidas de contención o la crisis), así como asegurar las necesidades primordiales de alimentos, vivienda, agua y servicios médicos básicos, sobre todo para la población pobre y vulnerable.
- Minimizar la desaparición permanente de fuentes de empleo, ante todo en las pequeñas y medianas empresas.

- Asegurar la supervivencia y el funcionamiento de sectores estratégicos de importancia sistémica, como los sistemas alimentarios, bancario y de telecomunicaciones, entre otros.

Todo esto costará, y mucho. ¿Cuáles son los recursos y medios con los que se cuenta?

1. Política fiscal contracíclica. El FMI, en su publicación *Fiscal Monitor* (abril de 2020), calcula que el promedio de los paquetes fiscales en el mundo representa el 9,5% del PIB. El mismo reporte asume que la deuda pública/PIB mundial subirá 13 puntos porcentuales como consecuencia de la pandemia. En Estados Unidos el gobierno ha desplegado programas de rescate fiscal que ascienden a casi 12% del PIB. Alemania ha anunciado uno de 10,6% del PIB. En contraste, con excepción de Perú, que ha anunciado un paquete fiscal de 8% del PIB, los países de Latinoamérica, como Chile o Brasil, han anunciado paquetes fiscales por debajo de 4%. El caso extremo es México, con solo 1,2% del PIB. La excesiva prudencia fiscal que en tiempos normales podría ser bien recibida, hoy no tiene cabida. La dimensión de la crisis actual da más latitud a la política fiscal que la usada hasta ahora por los gobiernos de la región. Si bien los gobiernos deben etiquetar las medidas tomadas como de emergencia, aumentos de la deuda/PIB de 10 o más puntos porcentuales probablemente sean necesarios. La preocupa-

ción por una trayectoria estable o decreciente de la razón deuda/PIB debe dejarse para los años posteriores a la pandemia y sus secuelas.

Los gobiernos, preocupados por la respuesta de las agencias calificadoras, deben tener en mente dos consideraciones. La primera es que los mercados financieros, en su mayor parte, ya están incorporando los recortes a las calificaciones en los precios de los bonos soberanos referentes. La segunda es que las calificadoras observan tanto el numerador como el denominador del cociente de deuda/PIB. Y mirarán con preocupación a aquellos países que para evitar aumentar su deuda permitan un desplome de su actividad económica que destruya fuentes permanentes de empleo, y que el acervo de capital productivo merme así sus fuentes de recaudación futura. A esto se une el posible aumento en el riesgo país de una descomposición de la cohesión social y política causada por la falta de apoyo a la población necesitada. Por muy relevantes que sean las calificaciones crediticias en tiempos normales, ahora no lo son. Esta es una de las dimensiones en que el funcionamiento normal del capitalismo requiere una pausa temporal. La política fiscal debe estar canalizada hacia la emergencia médica y la ayuda a los segmentos más vulnerables de la población, dentro y fuera de la marginalidad. Esto se sitúa en línea con las prioridades antes mencionadas.

2. Política monetaria convencional y no convencional. El uso e impacto de la política monetaria tradicional en Latinoamérica se ha visto limitado por el bajo nivel de las tasas de interés en términos reales imperante en la mayoría de sus países. Las líneas de crédito a corto plazo de los bancos centrales a bancos y empresas resultan útiles, pero no son suficientes si la crisis se extiende en el tiempo. Países como Brasil y Colombia han anunciado programas tímidos de compra de bonos del gobierno y corporativos, lo que en inglés se denomina *Quantitative Easing*, o “QE”. Empero, si la contracción de la actividad dura más que los uno o dos trimestres anticipados por la mayoría de los analistas, los problemas de liquidez se convertirán en problemas de solvencia. Esto nos confrontará con una crisis financiera cuyas consecuencias serán aún más devastadoras y duraderas.

Ante este desolador escenario, la política monetaria debe ir más allá. En particular, los bancos centrales en América Latina deben explorar medidas de apoyo económico empleando una política monetaria no convencional más agresivamente. Por ejemplo, podrían canalizar fondos de largo plazo al sistema bancario con incentivos adecuados para que, a su vez, la banca privada convierta estos fondos en préstamos de largo plazo al consumidor y a las empresas (idealmente, de 10 a 20 años, con un margen de 3 a 5 años de gracia, y a

tasas de interés concesionarias), que impidan que su capacidad de pago y su hoja de balance se deterioren. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, esto permitiría evitar al máximo los quebrantos. Un programa de este tipo debe ser de gran tamaño (un múltiplo de lo hasta ahora anunciado en los paquetes fiscales). Las líneas de crédito a largo plazo pueden ser usadas por los agentes económicos (individuos y corporaciones) en la medida de sus necesidades, y dependiendo de la duración de la crisis. Los bancos centrales estarían comprando estos activos a los bancos privados y los colocarían en su hoja de balance. Dado que estas transacciones no incrementan la deuda nacional, esta herramienta puede aumentar significativamente el esfuerzo anticíclico y disminuir la carga que pesa sobre la política fiscal³. Usar la hoja de balance de los bancos centrales para apoyar a las personas, y las pequeñas y medianas empresas, nunca sería una recomendación en tiempos normales.

3. Apoyo de las agencias multilaterales. Aun desplegando todas las herramientas fiscales y monetarias, muchos países no podrán solventar la crisis por sí solos. De acuerdo con reportes del FMI, más de 100 países se han acercado a esta institución para explorar opciones de ayuda precautoria. En América Latina, Ecu-

³ El concepto se explora en más detalle en: Obregón y Mariscal, 2020.

dor ya está en negociaciones y una decena más de países (en su mayoría del Caribe, devastados por el desplome en turismo) está en conversaciones.

Instituciones como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) deberán alterar sus estándares de operación para reflejar la naturaleza, profundidad, y todavía incierta trayectoria de esta crisis⁴. A continuación, se presenta nuestra lista de elementos deseables.

Primero, que la condicionalidad del apoyo financiero esté basada no en metas fiscales o de inflación de corto plazo, sino en la eficacia de los gobiernos en la utilización del apoyo financiero, de acuerdo con las prioridades enunciadas anteriormente. Segundo, los créditos deben ser de largo plazo (de 10 a 30 años), a tasas de interés fijas y cesionarias (por ejemplo, similares a la de los rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos), y han de incluir un periodo de gracia para intereses y principal de, al menos, tres años. Tercero, debe considerarse la posibilidad de una moratoria de tres años para la deuda existente con estas instituciones. Finalmente, y para los casos más extremos de países que sufran un daño permanente en su planta productiva, debe valorarse la condonación parcial o total de deuda.

⁴ Ver Lustig y Mariscal (2020a).

Para no debilitar el deterioro de la calidad crediticia de los organismos multilaterales, los países avanzados deberán estar listos para rellenar el “tanque” de estas instituciones. El FMI ha hecho público que cuenta con un billón de dólares (un “trillón” estadounidense) disponible para apoyar a los países afectados por la COVID-19. En una petición reciente, un grupo de expresidentes, exministros de finanzas y exbanqueros centrales de América Latina abogan por un fondeo de un billón de dólares adicionales para la capitalización del FMI (Henrique Cardoso, Lagos, Santos y Zedillo, 2020). Hasta ahora, el G-20 ha reaccionado tíbicamente ante este tipo de propuestas. Esto es entendible dados los esfuerzos fiscales que se deben llevar a cabo en los propios países. Sin embargo, la pandemia no podrá ser abatida si no hay cooperación a gran escala: el concepto de solidaridad se traslapa plenamente con la defensa propia de las economías nacionales. Metafóricamente, el mundo es un gran crucero donde todos somos pasajeros en riesgo. Esperemos que el G-20 entienda esto y actúe pronto en concordancia.

4. Protección social entre personas. Como indican Lustig y Birdsall (2020), la pandemia nos convoca a reconsiderar los esquemas de protección social y a ir más allá de lo que los gobiernos, grandes corporaciones, fundaciones o incluso filántropos puedan hacer. ¿Cómo ayudar,

por ejemplo, a trabajadores del sector formal recientemente despedidos, donde el seguro de desempleo no alcanza para pagar el alquiler, o a aquellos trabajadores cuyo ingreso se reduce súbitamente porque no pueden continuar proveyendo sus servicios como taxistas, peluqueros, meseros, actores, músicos, chefs, recepcionistas, etc.? Habitualmente no se apoya a este segmento de la sociedad puesto que los programas públicos de emergencia están destinados a la población más carente.

La población con la suerte de tener ingresos estables puede aquí desempeñar un papel: el de la protección social persona a persona. Esta jugará un rol primordial para amortiguar la gravedad de la crisis. Estas actividades de apoyo incluyen, por ejemplo: continuar pagando al servicio doméstico, aunque no se utilice; dar propinas generosas a quienes entregan comida a domicilio, comprar tarjetas prepagadas de regalo (*gift cards*) para ayudar a los restaurantes locales; pagar por adelantado al plomero, gasista, mecánico, a la tintorería, o incluso al peluquero o barbero, etc. En Gainesville, Florida, las personas pueden dejar propinas virtuales en sus restaurantes favoritos en “Tarros virtuales de propinas”.

Esta protección social entre personas también puede ponerse en práctica a la hora de compartir los costos económicos de la pandemia. En organizaciones sin fines de lucro, y peque-

ñas empresas o cooperativas, los gerentes pueden negociar recortes salariales transitorios o reducciones en las jornadas laborales para mantener las fuentes de trabajo intactas para todos o, al menos, para los empleados con menores ingresos. De modo similar, aquellos propietarios que tengan inquilinos que perdieron su trabajo, podrían relajar los plazos de pago e incluso considerar darles préstamos sin intereses. En las ciudades, las personas podrían dejar alimentos no perecederos que no planean comer en la puerta de sus hogares, para ayudar a las personas que viven en la calle.

Esta red de protección social entre personas no tiene porqué ejercerse únicamente en el terreno de los ingresos. En un contexto de escasez de productos para el cuidado sanitario, el acceso desigual a los equipos de protección se puede reducir a través de pequeños gestos. Quienes dispongan de guantes de protección extra, o máscaras, los pueden regalar a las personas que entregan paquetes, al cartero, etc.

Igualmente, dado que la enfermedad afecta más a los adultos mayores y a aquellas personas con patologías previas, los jóvenes pueden ofrecer su ayuda para realizar sus compras. La coyuntura también provoca una fuerte desigualdad en la disponibilidad de tiempo. Aquellas familias que tienen niños pequeños disponen de horarios más acotados para trabajar,

debido al tiempo que consume el cuidado de sus hijos. Quienes disponen de más tiempo pueden ofrecer su ayuda para entretener virtualmente a esos niños. Mantener el contacto virtual con los amigos y familiares, especialmente si están enfermos o viven solos, es otra forma de ayuda anímica.

En resumen, la protección social entre personas toma el principio de solidaridad que se observa más comúnmente en el seno familiar, y lo lleva más allá. Se compone del conjunto de pequeñas acciones que cada persona puede realizar para ayudar al negocio de su barrio, a las personas que contrata en tiempos normales y para apoyar a su comunidad. Es importante recordar que la protección social entre personas no puede sustituir lo que un gobierno puede y debe hacer para proteger a los más vulnerables: su objetivo final debe ser el de desplegar una red de protección sólida y eficiente. En consecuencia, la situación actual puede concienciar sobre la importancia que tiene financiar un amplio sistema público de protección social, para que la próxima crisis —cualquiera que sea su origen— sea menos dolorosa.

5. “El 1%” más rico también puede ayudar. Como se ha indicado, los gobiernos están activando programas de emergencia en materia de protección social. No obstante, en la mayoría de los países los sistemas tradicionales de protección probablementen-

te no alcancen para contener el impacto de la COVID-19 sobre el nivel de vida de millones de personas. Este texto hace una llamada a los miembros del llamado “1%” a iniciar, multiplicar y/o reorientar sus actividades filantrópicas, y de inversión sostenible, de modo que más —muchísimos más— fondos lleguen a las organizaciones sociales que gestionan bancos de alimentos, alojan a personas sin hogar, apoyan a enfermos sin acceso a diagnósticos o tratamientos, ayudan a las comunidades poco comunicadas, etc. Es el momento de marcar la diferencia⁵. Los gobiernos, además, pueden incentivar y facilitar la canalización de estos recursos privados mediante la creación de fondos y cauces especiales para este propósito.

Hay que recalcar que, de no darse un apoyo filantrópico importante que complemente la acción pública, los gobiernos podrían verse en la necesidad de gravar con un impuesto extraordinario la riqueza de los grupos en la punta de la pirámide de ingresos. Estos recursos adicionales darían más margen de maniobra fiscal. En todo caso, hay que tener en cuenta que dichas acciones conllevan un riesgo de politización importante, y

⁵ Un ejemplo notable es el de Jack Dorsey (CEO de Twitter) que donó 1.000 millones de dólares para combatir la COVID-19 y sus efectos. Esto equivale a cerca del 30% de su riqueza. Para una lista más completa de actividades filantrópicas en Estados Unidos ante la pandemia ver: <https://www.philanthropyroundtable.org/home/resources/philanthropy-and-covid-19>.

que su rendimiento en términos de distribución de recursos es significativamente menor que el que se obtiene por medio de las políticas macro planteadas, y el apoyo de las multilaterales. Asimismo, el Estado debe cuidarse de no enviar señales confiscatorias a los mercados que puedan aumentar la ya importante salida de capitales de la región, justo cuando más se les necesita. Sin embargo, dada la enorme desigualdad en la distribución del impacto de la pandemia, y los efectos negativos que tendrá en los niveles de vida de muchas personas pobres y pertenecientes a las clases medias, se justifica plenamente demandar que quienes más recursos tienen contribuyan de manera contundente⁶.

Conclusión

A menos que se descubra, produzca y disemine masivamente un tratamiento efectivo y/o una vacuna contra la COVID-19 en el corto plazo, la crisis golpeará a Latinoamérica y al mundo como nunca en tiempos de paz. Ante el gran costo económico y social de la cuarentena económica, los gobiernos enfrentan grandes presiones para abrir y normalizar sus economías. Dada la poca disponibilidad de diagnósticos, infraestructuras de rastreo y, por tanto, posibilidades de segregación de las personas infec-

tadas (no solo en América Latina, sino en todo el mundo), la apertura de los próximos meses arriesga el recrudecimiento de la pandemia. Los gobiernos de la región, así como su sociedad civil, deben pecar de cautelosos, y prepararse para una crisis más profunda y larga que la que los pronósticos anticipan. Las agencias multilaterales también deben tomar nota.

El mensaje es claro: la situación actual implica redoblar recursos y esfuerzos por parte de todos los actores de la sociedad para contener la caída de los ingresos a escala internacional, y al interior de los países, y para mitigar el daño a los más pobres, vulnerables y marginados.

Nora Lustig es profesora de Economía latinoamericana en la Universidad de Tulane. Jorge Mariscal es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Columbia.

⁶ Cabe notar que no se está proponiendo una reforma fiscal. Lanzar una reforma fiscal durante una crisis como la que se está atravesando sería contraproducente y no resultaría en el tipo de carga impositiva deseable.

Referencias bibliográficas

HENRIQUE CARDOSO, F., LAGOS, R., SANTOS, J.M. y ZEDILLO, E. (2020): “Latin America Confronts the Coronavirus”, *Project Syndicate* (16 de abril).

LUSTIG, N. y BIRDSALL, N. (2020): “La nueva desigualdad y la protección social entre personas”, Centro para el Desarrollo Global/PNUD (3 de abril).

LUSTIG, N. y MARISCAL, J. (2020a): “How COVID-19 could be like the Global Financial Crisis (or worse)”, en BALDWIN, R. y WEDER DI MAURO, B. (2020): “Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes”, *CEPR and Vox*. Disponible en: <https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes>.

-- (2020b): “La pandemia en América Latina: una crisis económica sin culpables”, *El País* (19/03/2020). Disponible en: <https://elpais.com/economia/2020-03-19/la-pandemia-en-america-latina-una-crisis-economica-sin-culpables.html>.

LUSTIG, N. y TOMMASI, M. (2020): “El COVID-19 y la protección social de los grupos pobres y vulnerables”, PNUD (abril) (en prensa).

OBREGÓN, C. y MARISCAL, J. (2020): “Emerging economies can and should use unconventional monetary policies” (marzo).

Fundación Carolina, abril 2020

Fundación Carolina
C/ Serrano Galvache, 26.
Torre Sur, 3ª planta
28071 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

ISSN: 2695-4362
https://doi.org/10.33960/AC_22.2020

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)